

C.A. de Concepción

xsr

Concepción, dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.

VISTO:

En este proceso RIT O-172-2024, RUC N°24- 4-0547670-K, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, dictó sentencia el 13 de agosto de 2024 por la cual se declaró la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante **Felipe Ignacio Benavente Ulloa** y la demandada **Universidad del Bío Bío** desde el 4 de marzo de 2013 hasta el 19 de enero de 2024. Como consecuencia de lo anterior declara injustificado el despido y se condena a la demandada a pagar al actor las sumas que indica, e igualmente a enterar, respecto del demandante, las cotizaciones en AFP, Fonasa y AFC, aunque de esta última solo la cotización que es de cargo del empleador; todas ellas por los periodos y monto de remuneración mensual imponible de acuerdo con los pagos de que dan cuenta las boletas que singulariza. Rechaza en lo demás la demanda y ordena que cada parte pague sus costas.

En contra de la referida sentencia, la parte demandada dedujo recurso de nulidad deduciendo como causal principal, la establecida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo y, en subsidio, la del artículo 477 del Código del Trabajo segunda parte, denunciando como infraccionados los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República, artículo 35 de la Ley N° 21.094 y artículo 58 del Código del Trabajo.

A la audiencia fijada para conocer el recurso, únicamente asistió el abogado recurrente, quien expuso lo que estimó conveniente para su teoría del caso.

CONSIDERANDO:

1º) Que, como primera causal, se deduce la contenida en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, *“cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PREXXSJXGBW

Funda el recurrente su causal, en que, en la contestación de la demanda, alegó que todos los convenios a honorarios suscritos con el demandante se adecuaban completamente a la norma del artículo 11 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y al artículo 48 de la Ley N°21.094, pues correspondían a la hipótesis de contratación de un profesional para la realización de cometidos específicos de docencia, los que se encontraban señalados en cada uno de sus contratos. Sin embargo, la sentencia recurrida en su motivo 10°, al valorar las actividades contratadas por la Universidad al actor, asimila especificidad con labores permanentes o no habituales, concluyendo que siendo la docencia una labor permanente de la demandada, los contratos suscritos por las partes quedan fuera de la citada norma del artículo 11 del Estatuto Administrativo. Lo que constituye un yerro del juez de base, desde que lo permanente en la Universidad es la labor académica, la que incluye la docencia, pero contratar en base a honorarios a un profesional para que realice una asignatura determinada, que forma parte de varias carreras, se encuentra autorizado precisamente por la hipótesis de contratación contenida en el indicado artículo 11, y a partir del año 2023, en el inciso 2° del artículo 48 de la Ley 21.098, por corresponder, la prestación, a servicios específicos, o a la prestación de servicios o labores de docencia académica hasta un máximo de 12 horas semanales o para impartir hasta cuatro asignaturas o por un semestre académico, respectivamente. Razonar lo contrario implica que lo allí normado carecería de aplicación.

Agrega, que no se opone a la calidad de “cometido específico” el que la labor o función sea de una larga duración o continua en el tiempo, ella no tiene límite temporal, sino su valoración se refiere exclusivamente a su determinación y a la posibilidad de distinguirlas entre otras funciones, lo que en el caso sí se cumple, ya que no existió discusión en torno a que el demandante sólo ejecutó, como labor, la docencia del idioma inglés.



Concluye, que la errónea calificación de los servicios prestados por el demandante fue sustancial y determinante para que en la sentencia se condenara a su representada al pago de las prestaciones que detalla el fallo. De haberse calificado correctamente las labores contratadas, se habría concluido, que el vínculo contractual celebrado por las partes era de honorarios, circunscrito a los permitidos por el artículo 11 de Estatuto Administrativo y por el artículo 48 de la Ley N°21.094.

Pide que se anule la sentencia recurrida por concurrir la causal anulatoria invocada, y se dicte, a continuación, sentencia de reemplazo que disponga que se rechaza íntegramente la demanda de autos.

2º) Que, a través del motivo de nulidad en comento, lo que se persigue únicamente es alterar la calificación jurídica de los hechos, sin poder modificarlos, ya que aquellos son inamovibles para esta Corte.

3º) Que, conforme al considerando 8º de la sentencia impugnada, se asentaron como hechos inamovibles: *“(...) el demandante prestó servicios por casi 60 convenios a honorarios en total, sin interrupción en un número variables de horas desde el año 2013 hasta enero de 2024.*

Sus labores eran de profesor de inglés para distintas carreras, a través de la coordinación del denominado Departamento de Servicios Generales.

Antes de cada semestre, tanto el demandante como los demás docentes, informaban su disponibilidad horaria, que era considerada por la directora del departamento para asignar una cantidad de cursos y horarios de clases para el semestre. Conforme dicha asignación se suscriben convenios a honorarios, el cual fijaba un honorario y también una modalidad de pago en parcialidades mensuales.

Hasta antes de la pandemia las horas de clases realizadas se registran en una hoja de control. Posteriormente se registra la actividad docente en una plataforma informática.

Los docentes deben también realizar atención de alumnos, evaluar y registrar las calificaciones.

Sus clases deben cumplir con el programa académico de la Universidad. Tiene reuniones de coordinación al inicio y fin del semestre.”.

4º) Que, seguidamente, el juez de la instancia en el motivo 9º de su sentencia, verificó que: *“De acuerdo a lo anterior, la forma en que se*



prestaron los servicios por el demandante tienen las características propias de un contrato de trabajo, esto es, de subordinación y dependencia, la cual se desprende de los hechos expuestos que son los que tradicionalmente se consideran como indicativos de esta naturaleza de servicios, esto es, se cumplen en las instalaciones del empleador, en un horario preestablecido, registrando las actividades realizadas, debiendo cumplir el programa de la universidad, sometido a evaluación docente de alumnos y la coordinación de una directora. Es decir, en el marco o como parte de una estructura administrativa y de control definida por la universidad para cumplir sus fines.

Los horarios y cantidad de horas variaban según disponibilidad que manifestaba el profesor en forma previa para cada semestre, pero esto no es excluyente de una relación laboral en base a lo ya expuesto. Esto es, que por cada contrato el demandante quedaba obligado a cumplir la jornada y toda la reglamentación universitaria implícita en el desarrollo de la docencia de acuerdo a un programa docente, y evaluación y atención de alumnos, todo ello determinado por la universidad y no de manera libre.”

5º) Que, para resolver la litis se debe establecer si el demandante desplegó un quehacer como lo ordena el citado artículo 11 de la Ley N°18.834, o si, por el contrario, lo desplegó bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador, conforme a los hechos asentados en la sentencia en examen.

6º) Que, conforme a la normativa antes mencionada, la premisa esta constituida por la vigencia del Código del Trabajo respecto de todas las vinculaciones de índole laboral habidas entre empleadores y trabajadores, entendiéndose por tales, en general, aquellas que reúnen las características derivadas de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7 del ordenamiento aludido, esto es, la relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha tarea, donde la presencia de aquéllas constituye el elemento esencial, determinante y distintivo de una relación de este tipo.

Por su parte, el contrato a honorarios es un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado



puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. Los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad (en este sentido, entre varias, sentencias de la Excma. Corte Suprema de 03 de enero de 2020, rol 15.615- 2019 y de 12 de junio de 2020, rol 23.063-2019). (El subrayado es nuestro).

Bajo este escenario, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan la presencia de subordinación o dependencia clásica, esto es, a través de la verificación de indicios materiales.

7º) Que, conforme a lo expuesto en los motivos tercero y cuarto precedentes, en el caso de marras, ha quedado establecido que el demandante se desempeñó como docente de la Universidad del Bío Bío, desde el año 2013 hasta enero de 2024, mediante múltiples



contratos a honorarios (60) para realizar funciones propias del quehacer natural y habitual de la universidad, pues se desempeñaba precisamente en labores de docencia impartiendo clases de inglés en las distintas carreras de la casa universitaria, lo que descarta la accidentalidad y especificidad de las labores contratadas, al tenor del razonamiento de la Excma. Corte Suprema, plasmado en el considerando anterior.

De esta manera, excluida la accidentalidad y especificidad, atendida la forma en que se prestaron los servicios por el demandante, con las características propias de un contrato de trabajo, esto es, de subordinación y dependencia, lo cual se desprende de los hechos expuestos por el juez de base, que son los que tradicionalmente se consideran como indicativos de esta naturaleza de servicios, esto es, se cumplen en las instalaciones del empleador, en un horario preestablecido, registrando las actividades realizadas, debiendo cumplir el programa de la universidad, sometido a evaluación docente de alumnos y la coordinación de una directora, en el marco o como parte de una estructura administrativa y de control definida por la universidad para cumplir sus fines, con el pago de un estipendio; resulta ostensible que corresponde aplicar las normas del Código del Trabajo al caso sub judice, puesto que el vínculo recién descrito reúne las características que surgen de la definición que de contrato de trabajo consigna el artículo 7 del Código del ramo, ya que se trata de servicios personales, intelectuales o materiales que se prestan bajo un régimen de dependencia o subordinación, por los que se paga una remuneración.

8º) Que, además, debe indicarse que el inciso 2º del artículo 48 de la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, introducido por la Ley N° 21.526, publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de diciembre de 2022, que señala: *“además, las universidades del Estado podrán contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios o labores de investigación, docencia académica de pre y postgrado*



hasta un máximo de 12 horas semanales o para impartir hasta cuatro asignaturas o por un semestre académico. Asimismo, podrán contratar a honorarios aquellos servicios que se requieran para la ejecución de proyectos y actividades específicas que cuentan con financiamiento propio para su ejecución, incluyendo labores de docencia, investigación o extensión.”, no cobra aplicación en el concreto caso, como lo pretende el recurrente; pues, como lo refirió el sentenciador del grado en el motivo séptimo de su fallo, la relación del demandante se inició en el mes de marzo de 2013, anterior a la fecha de entrada en vigencia de Ley 21.526, normativa que no contiene ninguna disposición transitoria sobre relaciones que comenzaron antes de su entrada en vigor. Y por lo demás, no se enarboló como causal de nulidad la infracción de ley por su no aplicación.

9º) Que, en estas condiciones, el yerro en la calificación jurídica acusado por el recurrente no es efectivo, por lo que el motivo anulatorio del análisis ha de ser desechado. ■

10º) Que, en subsidio se ha deducido la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, en su dimensión de infracción de ley, por cuanto se condena a la Universidad del Bío Bío al pago de las cotizaciones de AFP, Fonasa y AFC en favor del demandante por el periodo del 04 de marzo de 2013 al 19 de enero de 2024.

Sostiene el recurrente que tal situación constituye una infracción a los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política del Estado y al artículo 35 de la Ley N°21.094 sobre Universidades estatales en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo.

Expresa que, debido al principio de legalidad a la Universidad del Bío Bío, le es imposible contratar bajo la normativa del Código del Trabajo, principio que también le impide el pago de prestaciones que no se encuentran autorizadas por la ley, de tal modo que carecía de título para retener y hacer el pago de las cotizaciones de seguridad social demandados por el actor durante la vigencia de la contratación a honorarios, resultándole imposible el pago de dichas prestaciones.



Agrega, que en virtud de la relación contractual entre el demandante y su representada, se pactó una contraprestación económica que fue pagada en su totalidad, de la que sólo se retuvo por la Universidad los porcentajes que indica en su escrito a fin de cumplir con lo mandado por la Ley N° 21.113, sin que hiciera otro descuento distinto al expresado y a los propios del impuesto a la renta. Por lo que nunca realizó a los honorarios otra deducción que los dichos, ya que carecía de título que la habilitara, situación que fue conocida y aceptada por el demandante durante todo el tiempo que estuvieron vinculados contractualmente. Afirma, que pretender lo contrario vulnera la supremacía constitucional de legalidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, ahondando en orden a que los órganos del Estado desempeñan sus funciones de acuerdo a la legalidad dual, cuyo concepto desarrolla y que estima es conculcada por la sentencia impugnada al condenarlo al pago de las prestaciones previsionales por un periodo en que no correspondía su entero por no existir relación laboral. Cuestión que también contraviene las normas sobre legalidad presupuestaria, contenidas en el artículo 100 de la Carta Magna.

Asimismo, estima infringido el artículo 35 de la Ley N°21.094 sobre Universidades estatales sobre régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera de dichas instituciones de educación, que implica que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso, lo que viene a ratificar la imposibilidad en la que se encontraba la demandada para hacer pago de las cotizaciones previsionales contempladas en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Termina por señalar que los errores de derecho enunciados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de no mediar ellos, se habría concluido que al órgano estudiantil no le correspondía retener, declarar y pagar cotizaciones previsionales a las personas que se desempeñaban bajo el vínculo a honorarios, como es el caso de



autos.

Pide, respecto de esta causal, que se invalide el fallo por el que se recurre y se dicte la sentencia de reemplazo declarando la improcedencia del pago de las cotizaciones previsionales demandadas, con las costas del recurso.

11º) Que, en lo relativo a la causal del artículo 477, en su hipótesis de infracción de ley, debemos restringir la crítica a la correcta o incorrecta aplicación de determinadas normas jurídicas a los hechos establecidos en base al análisis de la prueba rendida.

12º) Que, para efectos de decidir si efectivamente se ha incurrido en las contravenciones que se denuncian, debe necesariamente consignarse que en lo que concierne al deber de los órganos de la Administración del Estado de enterar cotizaciones de seguridad social respecto de una persona con la que existió una vinculación a honorarios calificada de laboral por la respectiva sentencia, la Excm. Corte Suprema reiteradamente ha dicho que la premisa en materia previsional está dada por el reconocimiento de la orden contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador la obligación de deducir de las remuneraciones de los dependientes “las cotizaciones de seguridad social”, por lo que se trata de un descuento de carácter perentorio, cuya naturaleza imponible es determinada por la ley, lo que hace inexcusable su cumplimiento, como lo refuerzan y precisan los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500.

Además, para sostener la vigencia de tal obligación, sin perjuicio de que la relación, en su origen, no fuera reconocida como laboral por las partes, como es el caso, se ha acudido a la presunción contenida en el artículo 3, inciso segundo, de la Ley N°17.322, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia correspondiente (en este sentido fallos Rol N°6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016, 3.618-2017 y 147.807-2022).

13º) Que, también se ha resuelto que los razonamientos precedentes, son comprensivos tanto de las cotizaciones previsionales



como de salud, atendido el tenor literal del citado artículo 58, misma formulación amplia que utilizan los artículos 1 y 3 de la Ley N°17.322; y que, por lo demás, corresponde a la judicatura dar eficacia a los derechos consagrados en el artículo 19 números 9 y 18 de la Constitución Política, que obliga al Estado a garantizar el acceso a todos los habitantes a las prestaciones de salud y seguridad social, lo que dada la configuración que la legislación ha hecho del sistema, supone velar por el oportuno cumplimiento de la obligación de aportar a financiar los fondos respectivos, sea de manera directa por los trabajadores independientes o a través de la retención del empleador, para los dependientes.

Asimismo, también se ha decidido que lo anterior es igualmente aplicable a las cotizaciones que financian el seguro de cesantía consagrado por la Ley N°19.728, puesto que corresponde a una prestación establecida en forma obligatoria en favor de los dependientes regidos por el Código del ramo, de modo que el inicio de la relación laboral de un trabajador no sujeto al seguro generará su incorporación automática a éste y la obligación de cotizar en los términos establecidos en el artículo 5 de la citada ley y, en caso de incumplimiento, su artículo 11 prevé un sistema de cobro y sanciones similar al del Decreto Ley N°3.500, al que se aplican numerosas normas de la Ley N°17.322, que regula su cobranza judicial. De manera que, por los fines que satisface este seguro, su carácter obligatorio y universal, y por la técnica de pago y cobro de las cotizaciones que contribuyen a financiarlo, se debe concluir que se trata de una prestación de seguridad social a efectos de lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo, por lo que, si la obligación no fue cumplida durante la vigencia del contrato, deberá imponerse de su solución. En consecuencia, acreditado que el empleador no cumplió con su obligación previsional durante la vigencia del vínculo, la condena debe incluir el entero de las previsionales propiamente tales, y las de cesantía y salud (en igual sentido se ha fallado en recurso de unificación de



jurisprudencia de 29 de diciembre de 2023, Rol N° 147.807-2022).

14º) Que, por lo expresado, cabe concluir que el tribunal, al hacer lugar al pago de las cotizaciones de seguridad en la forma en que lo hizo en la sentencia, hizo una correcta aplicación de la normativa aplicable al caso de autos, razón por la cual, tampoco existe la infracción de ley que denuncia el recurrente, en esta causal de nulidad subsidiaria.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 477, 478, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Pablo Zeiss Martínez, en representación de la Universidad del Bío Bío, en contra de la sentencia dictada de trece de agosto de dos mil veinticuatro, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes, quien fue de la opinión de acoger el recurso por la primera causal de nulidad, anular la sentencia, en definitiva rechazar la demanda, en razón de los fundamentos expuestos en el mismo.

Regístrese y devuélvase por la vía correspondiente.

Redacción de la ministra suplente Jimena Cecilia Troncoso Sáez, y la disidencia, por su autor.

Aunque concurrieron a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, no firman la ministra suplente señora Jimena Cecilia Troncoso Sáez por haber terminado la suplencia que servía ni el abogado integrante señor Marcelo Enrique Matus Fuentes por tener un inconveniente informático con la aplicación Authenticator.

NºLaboral - Cobranza-635-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PREXXSJXGBW

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por el ministro titular señor Rodrigo Alberto Cerda San Martín, la ministra suplente señora Jimena Cecilia Troncoso Sáez y el abogado integrante señor Marcelo Enrique Matus Fuentes. No firma la señora Troncoso por haber terminado la suplencia que servía, ni el señor Matus por tener un inconveniente informático con la aplicación Authenticator. Concepción, a dieciocho de febrero del año dos mil veinticinco.

En Concepcion, a dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PREXXSJXGBW